

ULTRAMAR: POR LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA

De una economía de subvenciones a una economía de proyectos

12/04/2017

La histórica movilización social que se vive en la Guayana es un símbolo: el del fracaso manifiesto de las políticas públicas llevadas a cabo desde hace décadas en los territorios de ultramar.

Esta constatación demanda un cuestionamiento profundo de las modalidades de ejecución de la financiación europea, reflexión que debe centrarse en un diálogo estratégico directo entre las instituciones europeas y los territorios de Ultramar, unas valiosas herramientas para el espacio comunitario.



He aquí una cifra reveladora: de media, entre el 50% y el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años están en paro en los departamentos de ultramar. Sabiendo, además, que el coste de la vida es muy superior al de la metrópoli, estamos ante un polvorín que crea un sentimiento de verdadera injusticia social y alimenta la agitación de la que somos testigos actualmente en la Guayana.

Dado que la economía de los territorios de ultramar sigue dependiendo mucho de las aportaciones nacionales y

europas, destinadas originalmente a sentar las bases de un desarrollo territorial que permita a estas regiones integrarse en la dinámica económica mundial, la observación del creciente declive socioeconómico de estos territorios es una llamada de alerta, y cabe preguntarse legítimamente sobre la eficacia real de estos mecanismos.

La respuesta está clara. Si estas ayudas no consiguen alcanzar sus objetivos, es porque los guardianes del poder económico local, incluso nacional o internacional, no tienen ningún interés en que la región alcance el nivel de desarrollo «de referencia», hecho que tendría como consecuencia inmediata el fin de las ayudas nacionales y europeas. Asistimos indudablemente a la orquestación de un sistema económico que se alimenta del empobrecimiento de estas regiones y que, de este modo, permite captar las subvenciones que este fenómeno lleva aparejadas, ya que es evidente que esta renta

permanente únicamente beneficia a algunos actores privilegiados.

A causa de esta desviación de las políticas económicas regionales, cualquier dinámica de desarrollo está condenada al fracaso y seguiremos siendo testigos sin esperanza de cómo estas regiones de ultramar continúan inmersas en este círculo vicioso de dependencia.

Víctima involuntaria de estas disfunciones, la población de los territorios de ultramar observa con consternación cómo se realizan proyectos dispendiosos, mientras aumentan las desigualdades, y cómo sigue sufriendo en su día a día carencias muy graves en la prestación de servicios de primera necesidad en los ámbitos socioeducativo, económico y sanitario. Este estado de cosas es la principal explicación de que los departamentos de ultramar acumulen, además de tasas récord de pobreza, las desigualdades más profundas de Francia.

A pesar de estos problemas estructurales, los numerosos mecanismos de financiación europea, previstos en el Programa Operativo (PO), no se han puesto en marcha o apenas han arrancado. Aunque, de hecho, existen fondos FEDER, FEADER y FSE disponibles, persisten bloqueos administrativos e institucionales que complican su puesta en marcha en ultramar, lo que agrava la situación de estos territorios.

El desamparo de la población guayanesa y, de forma más general, la de los departamentos de ultramar, debe dar lugar a una concienciación a escala nacional y europea sobre la absoluta necesidad de reorientar estratégicamente las políticas regionales para los territorios de ultramar.

Aunque los retrasos acumulados en materia de desarrollo no aconsejan en ningún caso poner fin a este apoyo financiero, resulta urgente que estos fondos se utilicen para lo que están destinados con vistas a alcanzar objetivos medibles para las poblaciones directamente afectadas. Resulta intolerable que Francia y, de forma más

general, los 27 Estados Miembros de la Unión Europea participen en una parodia de «ayuda al desarrollo» por medio de esta economía de subvenciones a los territorios de ultramar, en lugar de favorecer su despegue «mediante una economía de proyectos».

Esta situación demanda, pues, una revisión rigurosa de los mecanismos de financiación, que deben reorientarse hacia políticas de proyectos que sean directamente aprovechables por la población de estos territorios.

Las urgencias socioeconómicas de estos territorios exigen, por tanto, abordar estos problemas con propuestas concretas.

Por un lado, en Francia, en este periodo de elecciones presidenciales, es esencial que los candidatos hagan suyos estos problemas y planteen una visión ambiciosa para estos territorios, que con demasiada frecuencia quedan fuera del debate público.

Por otro lado, la búsqueda de proyectos y soluciones eficientes sobre el terreno demanda la **creación de un Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión Europea, dedicado especialmente a la Guayana y a los territorios de ultramar**, y que permita el despliegue de herramientas de financiación consagradas a una política efectiva de transición y autosuficiencia económica.

Una estrategia de desarrollo que podrá apoyarse en las incontables fortalezas de los territorios de Ultramar, en los sectores innovadores, como el de las energías renovables o la biodiversidad, y en las fuerzas de la sociedad civil, que está lista para movilizarse y construir su futuro.

Sobre estas fortalezas y estas fuerzas deberían apoyarse los responsables nacionales y europeos para hacer de estos territorios lo que deberían o no han podido ser: elementos indispensables de la proyección de Francia y la Unión Europea en zonas que tienen muchas expectativas depositadas en nuestra ejemplaridad.

Maryse COPPET

Abogada del colegio de Bruselas y Guadalupe

